

AMPARO CONTRA SENTENCIAS JUDICIALES Y ENFRENTAMIENTO ENTRE LAS CORTES *

por Catalina Botero Marino

Un caso que muestra de manera ejemplar el conflicto entre las Cortes es el caso Antolinez (SU – 1185 de 2001). Se trata de una decisión de la Corte Constitucional que ordena anular una sentencia de casación de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. No obstante, esta última decide no cumplir la orden de tutela, por cuanto entiende que ello afectaría “el orden jurídico constitucional y la distribución de competencias que la propia Constitución hace entre las diversas cortes”. La Corte Suprema afirma que siendo ella el “órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria” no tiene el deber jurídico de obedecer ordenes de otras Cortes que se refieran a sus sentencias de casación. Ante el incumplimiento de la sentencia de tutela, el señor Antolinez acudió al sistema regional de protección de derechos humanos, tal y como se comenta en la siguiente nota.

La acción de tutela (amparo) interpuesta por el señor Antolinez, como trabajador del Banco de la República, contra la sentencia de la Suprema, buscaba la nulidad de la sentencia de casación y el reconocimiento del derecho a la pensión de conformidad con lo establecido por la convención colectiva que le era aplicable. La tutela sin embargo planteaba dos problemas teórico-constitucionales: la protección constitucional de los derechos de los trabajadores reconocidos en la convención colectiva y la interpretación de dicha convención de conformidad con la Constitución.

En este caso se discutía la aplicación del numeral 3º del artículo 8º de la Convención Colectiva del año de 1973 del Banco de la República que al establecer los requisitos para acceder a la pensión dejaba de mencionar el requisito de la edad mínima. En consecuencia, el juez de instancia entendió que la convención no exigía este requisito y ordenó al Banco el pago de la pensión correspondiente. En la demanda de casación, el Banco cuestionó el fallo de segunda instancia, aduciendo que había incurrido en error de hecho por haber dejado de considerar que en una interpretación sistemática – a la luz de convenciones anteriores – la norma antes citada exigía, para el reconocimiento de la pensión convencional, ciertos requisitos de edad que, en su criterio, no cumplía el trabajador.

Naturalmente, en principio, se trata de una cuestión de relevancia legal cuya solución debe darse por la Corte Suprema al amparo de la ley vigente. No obstante, como se verá adelante, el caso tenía que resolverse de conformidad con las disposiciones constitucionales sobre el derecho de asociación y el valor de la convención colectiva (art. 38), los derechos de los trabajadores (art. 13, 25 y 58) y, en particular, la aplicación del principio de favorabilidad y debido proceso (art. 29). El estudio de las dos sentencias – Corte Suprema y Corte Constitucional – permite ver con claridad el valor que cada una de estas corporaciones confiere a la Constitución Nacional y a las normas antes citadas que consagran y protegen los derechos de los trabajadores en la relación laboral. Veamos:

Al examinar la disposición de la convención colectiva en cuestión, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia sostuvo que el alcance normativo del artículo de la convención debía fijarse a partir del análisis del conjunto de las pruebas que

obraban en el expediente y que incluían laudos y otras convenciones, las cuales podían utilizarse como referente válido para desentrañar la voluntad real sus autores. Para la Sala, ad quem había incurrido en un “yerro evidente”, por limitar su análisis probatorio a lo expresado en la convención de 1973. En desarrollo de esta “interpretación integral” y sin desconocer la existencia de un laudo arbitral de 1965 que expresamente reconocía el derecho a la pensión convencional a partir de los 10 años de servicio y “cualquiera que sea su edad”, la Corte Suprema encontró que ya en 1967 una nueva Convención había suprimido esta última expresión como muestra indicativa de que, en adelante, su disfrute era “a partir del momento en que el trabajador cumpliera la [edad] establecida en la ley para casos semejantes...” y no “a cualquier edad”.

Al conocer la acción de tutela interpuesta por el trabajador contra esta decisión, la Corte Constitucional ordenó anular la sentencia de casación con los siguientes argumentos. En primer lugar, la Corte Constitucional señaló que, de conformidad con el artículo 469 del C.S.T, la convención colectiva es un acto solemne y la prueba de su existencia en el proceso laboral se debe hacer aportando copia auténtica de la misma y el acta de su depósito oportuno ante la autoridad laboral. Una vez ha sido aportada la convención al respectivo proceso, debe ser plenamente acreditada como medio de prueba de la norma que contiene el derecho que se quiere hacer valer en el juicio. No es entonces facultad del juez acudir a instrumentos probatorios ajenos a la convención para definir su valor jurídico, su contenido y/o alcance cuando ésta ha sido debidamente aportada y su texto es claro y suficiente y no parece contradecir el ordenamiento jurídico vigente.

Considerando lo anterior, la Corte concluye sosteniendo que en atención al valor normativo y al carácter de acto solemne de la convención, siempre le compete el juez laboral interpretarla de acuerdo al contenido material de su texto y, en caso de duda, optar solo por la interpretación que resulte más favorable al trabajador. Para la Corte, un proceder contrario a esta exigencia, que no encuentre fundamento en un principio de razón suficiente, configura una vía de hecho en cuanto implica un desconocimiento flagrante de los derechos fundamentales del trabajador, en especial, el debido proceso. La Corte recuerda que es deber imperativo del funcionario judicial interpretar la convención a la luz de los principios de igualdad y favorabilidad consagrados en la Carta.

Por todo lo anterior, al revisar el caso, la Corte Constitucional encontró que la Sentencia de la Corte Suprema daba lugar a una vulneración de los derechos fundamentales del trabajador, dado que este órgano, actuando como el juez de la causa, apreció una convención colectiva del trabajo ignorando su naturaleza de acto solemne y fuente formal del derecho laboral, y en franco desconocimiento de los valores, principios y derechos constitucionales de los trabajadores.

Dado que la Corte Suprema de Justicia se negó a dar cumplimiento al fallo de tutela de la Corte Constitucional, el 22 de octubre de 2002 la Corporación Colectiva de Abogados “José Alvear Restrepo”, decidió poner en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el caso. La petición elevada por esta corporación, pretende responsabilizar al Estado Colombiano por la vulneración de las garantías judiciales, el derecho a la igualdad ante la ley y la protección judicial, derechos que se consagran en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Los abogados del peticionario, manifiestan que la petición debe ser admitida toda vez que el señor Cadena Antolinez acudió a todas las instancias internas, tanto administrativas

como judiciales, para proteger sus derechos, siendo la acción de tutela el último mecanismo de defensa que podía ejercer para tal fin. Afirman que a pesar de que dicha acción resultó favorable al actor (sentencia SU-1185 de 2001), sus derechos no han sido protegidos de forma efectiva, dado que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha desacatado las órdenes impartidas por la Corte Constitucional.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos registró la petición bajo el número P4391 del 26 de diciembre de 2002 y procedió a poner en conocimiento del Estado Colombiano el contenido de la misma con el fin de que en el transcurso de los siguientes dos meses, éste presentara sus alegaciones a la petición. No obstante, el 14 de marzo de 2003, el Estado Colombiano elevó una solicitud de prórroga a la comisión, la cual fue resuelta de forma positiva otorgándose un término adicional de 30 días, que expiró sin que se radicara respuesta alguna.

Los peticionarios ante el silencio estatal, solicitaron que la comisión presumiera como ciertos los hechos presentados y declarara el caso admisible. A pesar de esto, la Comisión en dos oportunidades (28 de agosto y 13 de noviembre de 2003) reiteró al Estado Colombiano la solicitud de información sin que se obtuviera respuesta, por lo que el 24 de febrero del 2004, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, previo análisis de lo expuesto por el peticionario y del estudio realizado a los requisitos de procedencia de la petición, resolvió admitirla y darle trámite al estudio de fondo.

Actualmente, el caso de Sergio Emilio Cadena Antolínez se encuentra a la espera del pronunciamiento parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.